

REFLEXIONES SOBRE LA ECONOMIA Y LA GUERRA EN CENTROAMERICA

*Alfredo Guerra-Borges **

Resumen

Las modalidades específicas que han tenido el desarrollo económico y la evolución política en Centroamérica, particularmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, dieron lugar a estallidos sociales de gran alcance, agravados posteriormente en estos dos últimos países a consecuencia de la intervención norteamericana.

La tesis del Autor es que la paz es absolutamente indispensable para salir de la crisis económica, renegociar en condiciones adecuadas la deuda externa de los cinco países y reactivar el Mercado Común Centroamericano, que es el "mercado natural" del intercambio de la industria establecida. Mientras se mantengan las actuales tensiones bélicas en el área, no habrá recuperación económica de Centroamérica. La paz es la única alternativa para salir del estancamiento.

Abstract

The specific characteristics of economic development and political evolution in Central America, particularly in Guatemala, El Salvador and Nicaragua, gave rise to social uprisings of great dimensions, subsequently exacerbated in the last two countries by North American intervention.

The author's thesis is that peace is an indispensable prerequisite for solving the economic crisis, renegotiating under acceptable conditions the five countries' foreign debt and reactivating the Central American Common Market, which constitutes the "natural market" for interchanges between established industries. While the current tensions of war persist, there will be no economic recovery in Central America. Peace is the only alternative for overcoming stagnation.

I

Después de un prolongado período de crecimiento económico, centroamérica vive hoy día la peor de sus crisis económicas. Después de un prolongado período de quietud política —de inquietud política soterrada o sofocada, para decirlo con más propiedad—, Centroamérica vive la más profunda de sus crisis políticas. En la cronología de estas crisis hay disparidad: el equilibrio se rompió primero en su expresión política, cuando todavía el crecimiento económico no se había detenido; pero en la acumulación de circunstancias que gene-

raron ambas crisis hay simultaneidad: las modalidades específicas que tuvo el desarrollo económico en Guatemala y El Salvador, y también, con algunas variantes, en Nicaragua, fueron consustanciales de la estructuración de regímenes políticos autoritarios, en los que no hubo espacio para la expresión de las clases subordinadas.

Después de la segunda guerra mundial la agricultura centroamericana orientada a la exportación registró una acelerada expansión e incorporó formas más intensivas de explotación de la tierra. La industria, por su parte, aumentó también rápidamente su producción, estableció nuevas ramas, asimiló capital extranjero más que ningún otro sector económico y estimuló el proceso de urbanización y de intermediación financiera. En estos años se desarrolló también una infraestructura de comuni-

* Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

cación, generación de energía, de servicios e institucional.

Así, pues, en el curso de unos treinta o treinta y cinco años, la economía centroamericana —tanto su anatomía como su fisiología— registró transformaciones sustanciales. Lo que no se modificó, sino para agravarse, fue su patología: los beneficios del desarrollo económico se concentraron en un segmento muy reducido de la población; fue un desarrollo concentrador y excluyente que polarizó la riqueza y la miseria. Una vez más las predicciones liberales de que el desarrollo económico corrige las desigualdades sociales exhibieron su engañosa utopía.

Como el desarrollo económico centroamericano no fue el resultado del desplazamiento revolucionario de estructuras económicas agotadas, sino el fruto de su adaptación progresiva, ello requirió desde un principio hacer uso de la fuerza, disponer de un Estado siempre atento a reprimir la libre manifestación de aquellos a cuyas expensas se operó ese cambio por adaptación, que fueron, ante todo, los campesinos. Dada la modalidad específica que tuvo el desarrollo capitalista, concretamente en Guatemala y El Salvador, las formas de conducta política de los grupos oligárquicos del pasado simplemente se transfirieron a las burguesías del presente, y la represión pasó a ser uno de los medios principales para acelerar la acumulación.

En Nicaragua el proceso adquirió su propio perfil: la prolongada ocupación norteamericana no podía dar otros frutos que los que finalmente dio, pues el sojuzgamiento de toda una nación no podía dar origen a un sistema de libre expresión de voluntades. Cuando fueron obligadas a retirarse, las tropas norteamericanas llenaron el vacío de su retiro instalando a Anastasio Somoza en el poder, y para que no germinara ninguna simiente de protesta la primera tarea fue asesinar a Sandino. “El Somozato desarrolló el capitalismo en Nicaragua y éste aburguesó antes que nada a la familia y luego se amplió al círculo de amigos y servidores más próximos (...). La administración de la cosa pública, en este contexto particular, (pasó a ser) el gobierno de los asuntos privados”¹/.

Sin embargo, al mismo tiempo que se enriquecía la familia-empresaria de los Somoza se desarrolló una burguesía que inútilmente buscó por muchos años el acuerdo con la dinastía, a fin de que el Estado sirviera los intereses del conjunto y no solo de una de sus partes, y al fracasar en ese intento se volvió contra el usurpador. Para entonces ya

había madurado la única fuerza real frente a Somoza: la insurrección popular. La burguesía nicaragüense pretendió, sin razón aunque con el apoyo de los Estados Unidos, ponerla a su servicio, pero su debilidad congénita le impidió asumir el liderazgo. La insólita e inesperada huida de la Guardia Nacional dio a la obra un desenlace que nadie, ni aun siquiera sus actores, había podido anticipar.

El desenvolvimiento político de Guatemala, El Salvador y Nicaragua tampoco vino a confirmar otra de las utopías liberales eurocéntricas: que el desarrollo capitalista apareja la constitución de un régimen democrático. Por el contrario, el sistema político conservó en los tres países los rasgos autoritarios del pasado. Economía y política se combinaron de tal manera que podría decirse —como una variante de una expresión de Florestan Fernández—, que en los últimos cuarenta años las sociedades de esos tres países se configuraron mediante una modernización de lo arcaico, apoyándose en una arcaización de lo moderno.

Y luego, cuando en Guatemala y El Salvador se puso en tela de juicio la capacidad de los partidos políticos para garantizar la estabilidad del sistema, se hipertrofiaron las funciones del ejército: dejó de ser exclusivamente un órgano de seguridad y asumió la función global de gobernar.

Muy brevemente se ha pretendido indicar en los párrafos anteriores las condiciones básicas que abrieron el capítulo de las confrontaciones armadas en Centroamérica, confrontaciones que en un principio estuvieron circunscritas en el ámbito nacional, para luego internacionalizarse en los casos de El Salvador y Nicaragua a consecuencia de la intervención norteamericana.

La evolución de los conflictos internos —auténticas crisis de los sistemas de dominación— tuvo variantes bien caracterizadas en cada uno de los tres países: en Nicaragua la lucha armada se inició en 1961, fue prácticamente derrotada entre 1963 y 1969, se restableció en 1974 y terminó por sustituir un sistema político-social por otro de índole radicalmente diferente. En El Salvador el apareamiento del primer grupo guerrillero en 1970 fue seguido por la constitución de otros cuatro más; por su consolidación en 1980 en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y su irrupción en la guerra civil a partir de 1981. En Guatemala la insurgencia se hizo presente en 1961; fue completamente desarticulada en 1966/70; resurgió en los inicios de la década siguiente, y hacia 1979/80, habiendo ganado un apoyo masivo en el área rural —según información de fuentes oficiales— estuvo a

las puertas de la guerra civil, pero no tuvo capacidad para abrirlas; la contrainsurgencia, por el contrario, atajó la posibilidad de una guerra civil, y aunque no llegó a eliminar a la guerrilla como en la primera ocasión, la redujo a una dimensión que no pone en riesgo la estabilidad del régimen.

Como es fácil suponer, las profundas crisis políticas a que se ha hecho referencia han tenido un impacto directo en la crisis económica, agravándola. Iniciada esta última en forma casi simultánea en los países centroamericanos a fines de los años setenta, por causas que se sitúan en las relaciones económicas internacionales de estos países, la crisis económica alcanzó mayores dimensiones por efecto del acelerado deterioro de la situación política interna.

En Nicaragua la guerra civil tuvo consecuencias desastrosas; sin hablar de las decenas de miles de vidas que se perdieron, la economía sufrió daños cuantiosos y en virtud del saqueo de los somocistas prácticamente quedó sin reservas monetarias internacionales.

En El Salvador la crisis política dio lugar a una considerable fuga de capitales y más tarde, a consecuencia de la guerra civil, no solo se ha alterado profundamente el funcionamiento de la economía en todos sus niveles, sino que se han tenido pérdidas millonarias que en gran parte se compensan con la afluencia de recursos norteamericanos. Sobre esto se volverá más adelante con bastante detalle.

En Guatemala, sobre todo en los años en que potencialmente pudo desencadenarse la guerra civil, se registró también una intensa fuga de capitales —que ya no volverán—, pero lo que ha destrozado la economía ha sido el desastroso, inmoral, irresponsable e incapaz manejo de la cosa pública. Por supuesto, la contrainsurgencia ha tenido un costo elevado que ha afectado las finanzas públicas. Hay en este caso una diferencia notable con El Salvador: en este país el esfuerzo de guerra se ha sostenido mediante el flujo de recursos norteamericanos, mientras en Guatemala la asistencia financiera de los Estados Unidos, y específicamente la ayuda militar, ha sido de muy bajo nivel; no llegó siquiera al medio millón de dólares en el período 1981/85. (En el Cuadro 6, en el rubro de asistencia de seguridad, aparece que en ese período Guatemala recibió un total de 22.8 millones de dólares, pero de esa suma corresponden al programa de ayuda militar solamente 300.000 dólares).

La intensidad de la crisis y la ausencia de transferencias financieras desde el exterior afectaron los

desembolsos en algunos proyectos de contrainsurgencia. Refiriéndose a las “aldeas modelo” y los “polos de desarrollo”, algunos jefes militares han declarado lo siguiente:

“El panorama al comienzo del período era el siguiente: de los 368 millones de quetzales que se necesitaban para implementar los planes, solo 14 millones estaban disponibles dentro de los diversos programas de desarrollo, ayuda, etc., en más de una docena de organismos estatales. Se ‘tiró a la basura’ el presupuesto original y se reorientaron los fondos, de manera que 90% de los recursos para los planes trazados provinieron de rubros existentes, y no de nuevos impuestos o préstamos extranjeros” 1-A/.

La conclusión general es que aun cuando la guerrilla guatemalteca se encuentre a la fecha en la situación descrita, y su futuro, al parecer, es de pronóstico reservado, su permanencia en el cuerpo social guatemalteco, y sobre todo el efecto acumulado de las medidas tomadas para combatirla, tienen indudables consecuencias económicas, la más obvia de las cuales es que se destine a fines improductivos (las funciones de seguridad) recursos que en una diferente situación se aplicarían en forma productiva dentro del esfuerzo para superar la grave crisis económica.

II

Una primera aproximación a la relación de la economía y la guerra en Centroamérica se obtiene al observar el proceso de militarización en los países del área. Según el Instituto de Estudios Internacionales sobre la Paz de Estocolmo, Suecia: “El incremento de la violencia interna en los países de Centroamérica ha sido acompañado en años recientes por un elevado nivel de militarización. El término ‘militarización’, como se usa en este texto, denota un crecimiento constante del potencial militar, lo cual refuerza el papel de las instituciones militares tanto en los asuntos nacionales, incluidas las esferas económicas, social y política, como en los asuntos internacionales”²/.

De acuerdo con la fuente especializada que se acaba de citar: “De 1979 a 1983 el gasto militar en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se ha incrementado más del 50 % en términos reales...” (3). En el mismo período ha aumentado considerablemente el personal militar y han tenido lugar cambios importantes en la composición de éste. Además, según la fuente citada, “...el número de las fuerzas paramilitares se incrementó en 180 por ciento debido a las nuevas necesidades de los gobiernos para mantener la seguri-

dad internacional y para combatir y suprimir la oposición interna" (4).

Hasta principios de la década pasada el armamento y el equipo militar de que disponían los países centroamericanos procedía, en lo fundamental, de los Estados Unidos en el marco de los programas de asistencia militar, pero desde 1975 Israel pasó a ser un importante proveedor de armas ligeras, aviones de combate y de entrenamiento, helicópteros, cohetes, etc. Guatemala cubre parte de sus requerimientos mediante una incipiente industria militar que utiliza patente israelí, pero los demás países no tienen producción de armas. En el caso de Nicaragua la asistencia militar de los Estados Unidos se suspendió desde mediados de 1981, de manera que los requerimientos de armamento y equipo se cubren con suministros de la Unión Soviética, Bulgaria y otros países de Europa oriental (5).

Una imagen de los efectivos militares en Centroamérica a la fecha más reciente (1985) se puede obtener mediante el Cuadro 1, el cual resume información compilada por el investigador mexicano Raúl Benítez Manaut. El cuadro incluye información que está disponible sobre los efectivos de fuerzas antigubernamentales.

La cifra correspondiente a "fuerzas paramilitares" en Guatemala es mucho más alta que la que aparece en el Cuadro 1. El investigador guatemalteco Gabriel Aguilera (6) anota un total de 914 600 miembros, de los cuales 900 000 pertenecen a las Patrullas de Autodefensa Civil, "...cifra asombrosa para la población del país —comenta el investigador citado— y que resultaría increíble si no fuera oficial y no desmentida por la oposición" (7). Según información oficial dichas Patrullas comenzaron a organizarse en 1981 y alcanzaron el nivel indicado en los dos años siguientes durante las operaciones de contrainsurgencia "Victoria 82" y "Firmeza 83".

En cuanto a Honduras, que en el Cuadro 1 aparece con la cifra más baja de efectivos militares, conviene tener en cuenta la siguiente observación del *SIPRIS Yearbook*: "La Fuerza Aérea Hondureña ha sido casi completamente reequipada desde la guerra con El Salvador en 1969, para llegar a ser una potencia formidable en Centroamérica en comparación con sus vecinos" (8). Sin entrar al detalle especializado —obviamente fuera de nuestra competencia—, cabe agregar en relación a lo anterior que ha aumentado el número de pistas militares hondureñas, además de las que se han construido con ingenieros de los Estados Unidos para mi-

siones de abastecimiento y de apoyo con aviones C-130 de la Fuerza Aérea de ese país. Están en operación igualmente un sistema avanzado de control aéreo mediante radar, que se terminó de instalar en 1983 y es operado por personal norteamericano; y un sistema de radar operado por marinos de los Estados Unidos en la Isla Tigre en el Golfo de Fonseca del Océano Pacífico (9).

Finalmente, en lo que toca al balance militar centroamericano en 1985, debe tenerse presente que la cifra de efectivos de Nicaragua en el Cuadro 1 puede diferir sensiblemente de otras cifras publicadas. El total, en consecuencia, depende de las fuentes utilizadas. Bajo el acoso militar de que es objeto —a lo que se hará referencia en una sección aparte más adelante—, Nicaragua implantó en 1983 el Servicio Militar Patriótico que establece un servicio militar de dos años para todos los nicaragüenses de 18 a 40 años. En El Salvador, Guatemala y Honduras no hay una ley que en forma universal obligue a prestar servicio militar, "...pero los tres gobiernos han practicado el reclutamiento forzoso, principalmente en las áreas rurales golpeadas por la pobreza" (10). La conscripción militar fue implantada en Honduras en febrero de 1984.

En la situación de guerra que vive actualmente Nicaragua se estima que 30 por ciento de su fuerza de trabajo está involucrada en proyectos de defensa civil, que incluyen la construcción de refugios para el caso de bombardeos. "En contraste con la mayor parte de los países de América Latina, las fuerzas armadas de Nicaragua incluyen una elevada proporción de mujeres —aproximadamente el 25 por ciento— de las cuales algunas tienen puestos de mando y de combate. Las mujeres constituyen también un significativo porcentaje de las milicias" (11).

La exposición que se ha hecho en los párrafos anteriores se complementa con la relativa a los gastos militares, sobre lo cual da cuenta el Cuadro 2.

Como se puede apreciar en el Cuadro 2 el incremento de los gastos militares entre 1975 y 1983 fue impresionante, salvo en el caso de Costa Rica. En términos reales el incremento fue también muy importante; y en ambos casos los coeficientes de expansión fueron mayores en Guatemala y El Salvador donde han habido operaciones de contrainsurgencia en gran escala. Costa Rica exhibe una cifra negativa cuando se mide el gasto militar en términos reales, pero ello es debido a que su tasa de inflación en 1983 fue sumamente alta (su Índice de Precios al por Mayor fue 345.6 en relación a 1980-100).

CUADRO 1

CENTROAMERICA: BALANCE MILITAR, EFECTIVOS MILITARES, 1985

	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica
Ejército, aviación y marina	40 000	41 650	17 200	45 800	
Fuerzas paramilitares ¹	11 600	9 500	5 800		10 000
Reservas activas				12 000	
Guardafronteras				4 000	
TOTAL	51 600	51 500	23 000	61 800	19 800²
Milicia y/o defensa civil ³	500 000			60 000	
Fuerzas antigubernamentales ⁴		10 000		15 000	

FUENTE: Elaborado con base en: Raúl Benítez Manaut, *La militarización de Centroamérica: problemas de interpretación*, Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985, p. 17.

- 1/ *Guatemala*: Policía Nacional y Guardia de Hacienda. *El Salvador*: lo mismo más la Guardia Nacional. *Honduras*: la fuente utilizada incluye los 5 800 efectivos hasta en el total; se ha preferido anotar el dato porque incluye 4 500 miembros de la Fuerza de Seguridad Pública y otros más y de esta manera la presentación es homogénea con respecto a los restantes países. *Costa Rica*: Reserva de la Fuerza Pública, antes denominada Organización para Emergencias Nacionales (OPEN). La fuente utilizada indica también que hay otros organismos paramilitares: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ); la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS); la Brigada Antiterrorista y el Comando Atlántico en la frontera con Nicaragua.
- 2/ La fuente utilizada anota un total de solamente 9 800 hombres, que son los efectivos de las Guardias Civil y Rural, pero para que la presentación de los datos sea homogénea con respecto a los demás países, se consideró más apropiado sumar estos efectivos a los de las fuerzas paramilitares.
- 3/ *Guatemala*: el dato se tomó de International Institute for Strategic Studies, *Military Balance, 1984-1985*. Ver en el texto otra estimación. *Nicaragua*: la fuente utilizada da una cifra que varía de 30 000 a 60 000. Se tomó la cifra más alta.
- 4/ *El Salvador*: estimación de los efectivos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). *Nicaragua*: estimación de los efectivos de los "contras" que operan desde territorio de Honduras. La fuente no incluye estimación de efectivos de la insurgencia en Guatemala.

Cabría agregar que los gastos militares han registrado nuevos incrementos en 1984/85, sobre todo en El Salvador y Honduras. Además, el monto total de recursos destinados a gastos militares en ambos países fue en 1983 mayor que el que aparece en el Cuadro 2, pues una buena parte de dicho monto total corrió a cargo de la ayuda militar de los Estados Unidos. Esa ayuda ha subido de nivel en 1984/85, sobre todo en El Salvador.

En lo que toca a Nicaragua el esfuerzo de guerra frente a una fuerza numerosa dotada de armamento avanzado, ha obligado a destinar a la defensa cada vez más recursos. Fuentes confiables dan a saber que en 1985 se destinó para la defensa el 50-54% del presupuesto del gobierno central. En todo caso, se sabe de fuente oficial que el gasto de defensa en 1984 consumió el 40% del presupuesto gubernamental (12).

¿A cuanto asciende, y qué rubros comprende, la ayuda económico-militar de los Estados Unidos a El Salvador? ¿Cuál es la magnitud de la agresión y los daños causados por ésta a Nicaragua? ... Para una mejor comprensión de las respuestas conviene, antes que nada, tener una idea acerca de la estrategia norteamericana en Centroamérica, toda vez que el curso de los acontecimientos ya no depende de los gobiernos y de los ciudadanos centroamericanos sino de las políticas seguidas por los Estados Unidos.

III

La Comisión Kissinger hizo la siguiente afirmación en su informe al Presidente Reagan: "Obviamente, el futuro de Centroamérica dependerá en gran parte de lo que ocurra en El Salvador"(13). El creciente involucramiento de los Estados Unidos

CUADRO 2

CENTROAMERICA: GASTOS MILITARES, 1975 Y 1985
(EN \$US MILLONES)

	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica
1975					
Defensa y Gobernación	40.6	18.7	21.3	16.9	13.5
Defensa/Gasto Gobierno Central	10.2 %	6.7 %	10.7 %	6.0 %	3.8 %
1983					
Defensa y Gobernación	191.8	126.4	54.9	15.1
Defensa/Gasto Gobierno Central	14.6 %	15.3 %	9.0 %	2.3 %
Incremento del gasto militar 1975/83	372.4 %	575.9 %	157.7 %	11.8 %
GASTOS MILITARES A PRECIOS CONSTANTES DE 1980					
1975	67.2	37.0	33.4	24.5
1983	180.6	99.2	41.4	4.4
Incremento en términos reales	168.8 %	168.1 %	24.0 %	-82.0 %

FUENTE: Elaborado con base en: Gabriel Aguilera, *La dimensión militar en la crisis de Centroamérica*, cuadros 3, 4, 7, 10 y 13. La relación defensa/gastos del gobierno central de Nicaragua es cálculo propio con base en SIECA, *Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica*, No. 17, 1982. Asimismo, es cálculo propio el gasto militar en términos reales, usando el Índice de precios al por mayor de FMI, *Estadísticas Financieras Internacionales*, excepto en el caso de Honduras que solo presenta Índice de precios al consumidor.

en la guerra civil salvadoreña está en consonancia con esa conclusión de la Comisión Kissinger. Y es en El Salvador donde se han definido las estrategias norteamericanas. Con las variantes del caso dichas estrategias se han seguido también contra Nicaragua. La más reciente campaña de Reagan para conseguir fondos para los "contras" destaca el hecho de que para aplastar a la revolución sandinista se está en disposición, incluso, de llegar a una confrontación con América Latina.

La estrategia norteamericana en El Salvador ha conocido dos fases bien definidas, en relación a ello dos especialistas en la materia han comentado con agudeza que: "Los grandes cambios de estrategia militar norteamericana desde la segunda posguerra han sido producidos por las derrotas sufridas" (14).

Es posible que así sea. En Centroamérica hay evidencias de que se tuvo una percepción inicial de la situación sumamente optimista, que luego se debió corregir ante la testarudez de los hechos. Sin embargo, nos parece que pierde objetividad el análisis en el caso de quienes ven una derrota norteamericana en cada cambio de sus planes militares. Aun más inaceptable resulta ser la pérdida de objetividad cuando derrotas indudables de la guerrilla

—sea en Guatemala o en El Salvador— son presentadas por ésta como derrotas de las campañas militares. Si así fuera, serían inexplicables, por decir lo menos, los significativos cambios que se han operado en los escenarios político-militares de ambos países.

Veamos ahora una breve reseña de los hechos.

Al asumir su alto cargo el Presidente Reagan anunció al mundo su decisión de poner término en corto plazo al conflicto interno en El Salvador. Al mismo tiempo, en enero de 1981 el FMLN lanzó su llamada "Ofensiva General" bajo el supuesto de que la población urbana se levantaría en una insurrección generalizada en apoyo de la guerrilla. Tal hipótesis no se confirmó en los hechos y por ello, luego de sostener sus ataques por veinte días, del 10 al 30 de enero, el FMLN se replegó a las zonas en que tenía control político y militar, y el ejército, asesorado por los norteamericanos, buscó el aniquilamiento de la guerrilla en un corto plazo. A tal efecto los Estados Unidos dieron entrenamiento intensivo a batallones especiales, primero al Atlacatl y luego al Atonal y el Ramón Belloso, con el objeto de saturar el espacio de operaciones del FMLN y derrotarlo mediante una estrategia de "cerco y aniquilamiento".

en El Salvador como en Nicaragua, resultó ser también el inverso del curso previsto originalmente por el gobierno norteamericano.

La nueva concepción —para aplicarse no sólo en Centroamérica sino igualmente en otras partes del mundo— es conocida ahora como *guerra de baja intensidad* y tiene "...dos ejes sustanciales: la reversión de procesos populares y revolucionarios triunfantes (Nicaragua, Angola, Mozambique, Afganistán), y la contrainsurgencia en aquellos países en donde exista una amenaza evidente al orden establecido (El Salvador) o una amenaza potencial aunque sea incipiente (Honduras, Costa Rica)". (15).

Algunos componentes esenciales de esta nueva concepción norteamericana son los siguientes: recuperación de la ofensiva en todos los niveles en contraste con la posición defensiva que caracteriza a la estrategia de contención; combinación de los aspectos militares, económicos, sociales y políticos pues, en definitiva, se persigue ganar el apoyo de la población y no solamente aplastar a la insurgencia; las tareas contrainsurgentes se confían a las fuerzas armadas del país de que se trate y el papel de los Estados Unidos se concreta en la ayuda económica y militar, la asesoría y el entrenamiento; la guerra de baja intensidad "...es un proceso largo, en el cual las opciones políticas, económicas y psicológicas proveen el mejor camino para el triunfo final (...) (esta guerra) no es simple ni de corto plazo; es un proceso complejo, de varios niveles y dimensiones, que tiene sus raíces en el cambio" (16).

En consonancia con lo anterior se combina el gasto militar con el gasto en operaciones psicológicas, sociales y políticas; se busca legitimar nacional e internacionalmente a los gobiernos (o a las fuerzas que los combaten, en el caso de Nicaragua); y se anticipa una participación prolongada del gobierno norteamericano en los conflictos, pues estos mismos se conciben como una guerra prolongada. Teniendo presente lo anterior podrá lograrse una más clara comprensión del papel que juegan en la guerra los recursos proporcionados al gobierno salvadoreño, así como el impacto de largo plazo de la política que se sigue en relación a Nicaragua.

IV

Hay una vieja disputa entre el gobierno del Presidente Reagan y el Congreso de los Estados Unidos acerca de la información que el primero sumi-

nistra al segundo en sus solicitudes de fondos para El Salvador. Los congresistas Jim Leach, George Miller y Mark O. Hartfield, que representan, respectivamente, a los estados de Iowa, California y Oregón, hicieron valer su autoridad para obtener información que no suele darse al público y prepararon un informe sobre el verdadero uso que se hace de los fondos suministrados a El Salvador. El informe proporciona una revisión detallada de los distintos rubros, de la que se tomará enseguida lo estrictamente más esenciales (17). En primer lugar, he aquí la distribución de los fondos suministrados en los años fiscales 1981-1985: (Ver cuadro 3).

El gasto directamente relacionado con la guerra se destinó al suministro de armas y municiones, aviones, entrenamiento de personal, transporte terrestre, equipo de comunicación, etc.

El gasto indirectamente relacionado con la guerra comprende, sobre todo, transferencias de dólares en efectivo que el gobierno salvadoreño vende a las empresas, las cuales compran esas divisas con colones y las utilizan para importar bienes de los Estados Unidos. El gobierno salvadoreño utiliza como ingreso presupuestario los colones resultantes de la venta de divisas. Los congresistas mencionados ponen en tela de juicio que se trata realmente de gastos indirectamente relacionados con la guerra, pues "...ayudan a cubrir el déficit fiscal del gobierno salvadoreño, claramente agravado, si no causado, por la guerra (...). Evidentemente, sin la Transferencia de Efectivo, el Gobierno Salvadoreño jamás podría haber triplicado sus gastos en las Fuerzas Armadas" (18).

Otra partida "indirectamente relacionada con la guerra" se destina a la población desplazada por la guerra: aparte del 10 por ciento de la población total que ha salido del país, otro 10 por ciento (525 000 personas) vive en campos de refugiados y otros asentamientos ("... un porcentaje más alto que el de vietnamitas que perdieron su hogar en el momento culminante de la guerra de Viet Nam")(19).

El otro componente de los fondos relacionados "indirectamente" con la guerra se ha destinado a proyectos de reparación de infraestructura dañada por la guerrilla.

La categoría de "reformas y desarrollo" incluye fondos para proyectos de reforma agraria, principalmente crédito para cooperativas que se formaron en las primeras etapas de la reforma, toda vez que ésta se ha estancado. Incluye también fondos para protección del poder Judicial; para establecer un sistema electoral funcional y ayuda para servi-

CUADRO 3

DISTRIBUCION DE LOS FONDOS SUMINISTRADOS POR LOS ESTADOS
UNIDOS AL GOBIERNO DE EL SALVADOR, 1981-85
(EN MILLONES DE DOLARES)

Categoría	1981	1982	1983	1984	1985	Total 5 años	%del Total
Gasto relacionado con la Guerra							
a) directo	35	82	81	197	128	523	30
b) indirecto	69	140	148	216	194	767	44
Subtotal	104	222	229	413	322	1 290	77
Reformas y desarrollo	19	28	61	73	86	267	15
Alimentos comercializables	26	27	39	46	44	182	11
TOTAL (cada año)	149	277	329	532	452	1 739	100

FUENTE: Elaborado con base en: Jim Leach, George Miller y Mark O. Hartfield, *U. S. Aid to El Salvador: An Evaluation of the Past, A Proposal for the Future. A Report to the Arms Control and Foreign Policy Caucus*, U. S. Congress, Washington D. C., february 1985, cuadro 1.

NOTA: Las cifras fueron redondeadas; incluyen estimaciones para el año fiscal 1985. El porcentaje se refiere a la participación del gasto en cada categoría en el total del período 1981/85.

CUADRO 4

NICARAGUA: DAÑOS FISICOS Y PERDIDAS DE PRODUCCION COMO
RESULTADO DEL ACOSO MILITAR, 1981-84
(EN MILLONES DE DOLARES)

	1981	1982	1983	1984	Total
Daños físicos	2.7	9.0	41.1	16.1	92.5
Pérdida de producción	4.3	22.3	102.4	171.4	300.4
TOTAL	7.0	31.3	143.5	187.5	392.9

FUENTE: Elaborado con base en CEPAL, *Estudio económico de América Latina y el Caribe. Nicaragua 1984*, p. 32.

Tras sucesivos fracasos en distintos lugares y a lo largo de un primer período, la estrategia de *despliegue rápido* fue sustituida en 1983 por una basada en la concepción de *guerra prolongada*. Se crearon entonces unidades dotadas de gran movilidad a tres niveles: batallones de reacción inmediata; batallones de tamaño intermedio y batallones de cazadores, subdivididos en unidades más pequeñas hasta el nivel de Patrullas de Reconocimiento de Alcance Largo (PRAL), con capacidad para entrar en territorio controlado por el FMLN sin ser descubiertas. Simultáneamente se proveyó a la fuerza aérea de gran número de helicópteros, aviones de combate y bombarderos.

La nueva estrategia es lo inverso de la primera y ello porque el curso de los acontecimientos, tanto

nueve comandos regionales. En mayo 1985 se formó la Unión Nacional Opositora (UNO), compuesta por Arturo Cruz, Adolfo Calero y Alfonso Callejas.

Siguiendo la orientación de obtener un triunfo rápido, la estrategia seguida durante un primer período fue emplear grandes agrupaciones concentradas en la frontera hondureño-nicaragüense e intentar tomar una parte del territorio de Nicaragua, proclamarlo "territorio libre", obtener de los Estados Unidos el reconocimiento de "gobierno provisional", y lo demás se da por descontado. Esta estrategia fracasó por completo, en ningún momento los "contras" han podido tomar y estabilizarse en una población medianamente importante. Entre 1983 y 1984 se incorporaron elementos po-

líticos a los planes militares, se hicieron infiltraciones en el interior de Nicaragua, se trató de crear la imagen de una guerra civil y se siguió la orientación de destruir objetivos económicos y de realizar acciones punitivas contra la población. La CIA estrechó su colaboración y elaboró el famoso Manual de Operaciones Psicológicas.

Como resultado del apoyo directo y público del gobierno de los Estados Unidos a los "contras" ha venido en aumento el número de combates con las tropas sandinistas: en 1981 hubo 15 combates; en 1982, 78 combates; en 1983 un total de 600; en 1984 se elevó el número a 948; y en los primeros seis meses de 1985 tuvieron lugar 710 combates. Por otra parte, los ataques contra la población y los sabotajes contra objetivos económicos han aumentado de 26 en 1981 a 513 en 1984 y un total de 310 solamente en el primer semestre de 1985 (20). De estas acciones algunas han tenido repercusión internacional como el ataque a Puerto Corinto con lanchas y cohetes incendiarios, así como el minado de los puertos nicaragüenses.

Dentro de este apretado resumen cabe agregar las pérdidas que ha tenido una y otra parte. Por lo que toca a los "contras" han registrado 7 253 muertos, 1 274 heridos y 595 capturados en el período 1981-1985 (primer semestre). Las bajas causadas solamente en 1983 (un total de 1 853), constituyeron el 25 por ciento de los efectivos de los "contras" en ese tiempo; el número de bajas de éstos ha aumentado en los años posteriores, lo que ha dado base al gobierno de Nicaragua a afirmar que la derrota definitiva de los "contras" es asunto de corto plazo. Pero también, en razón de lo mismo, el Presidente Reagan viene realizando una campaña intensiva para dar mayores proporciones a la ayuda norteamericana a la contrarrevolución. Obviamente, también en Nicaragua aplican los norteamericanos la estrategia de "Guerra de baja intensidad" y, en consecuencia, se sigue la orientación de una guerra prolongada, en la confianza (o la esperanza, es difícil elegir el término más apropiado) de que el desgaste de la economía terminará por volver al pueblo de Nicaragua contra su gobierno. Este sería un momento privilegiado para la intervención norteamericana directa, lo que no excluye otras eventualidades.

Por la parte de Nicaragua los daños causados por el acoso militar los ha estimado la CEPAL en la forma que resumimos a continuación:

La cuestión de los daños a que se refiere el cuadro 4 la ha llevado el gobierno nicaragüense ante la Corte Internacional de La Haya, que es la

instancia que viene conociendo en el juicio iniciado por Nicaragua contra los Estados Unidos por el acoso militar de que es objeto.

Aparte de lo anterior, el gobierno de Nicaragua ha planteado en el seno del GATT —organismo en el que ocupa una Vicepresidencia a partir de 1985—, la demanda por daños sufridos por lo que se califica como agresión comercial y agresión financiera por parte de los Estados Unidos. Se incluye en el primer concepto los daños con motivo del retiro de la cuota azucarera por parte del gobierno norteamericano; lo mismo que el retiro de las compras de banano y de las compras de carne, así mismo las pérdidas sufridas en la búsqueda de nuevos mercados para esos productos. Se incluye en el concepto de agresión financiera los daños por préstamos congelados en organismos multilaterales y bilaterales a consecuencia de las presiones norteamericanas. Por ambos conceptos se estiman daños por un total, en cifras redondas, de 700 millones de dólares, lo que sumado a los daños indicados en el Cuadro 4 arroja un total de *mil cien millones de dólares*.

Nicaragua ha sufrido también fuertes pérdidas humanas. En el período 1981-1985 (primer semestre) se han registrado 2 817 muertos; 3 020 heridos o mutilados; 2 825 secuestrados, 114 mujeres violadas; 6 239 niños huérfanos y un total de 142 980 desplazados. "La guerra contra Nicaragua le ha costado a la población nicaragüense 7 veces más víctimas anuales que la guerra contra el Viet Nam a la población estadounidense" (21).

VI

Se dijo en un principio que Centroamérica vive hoy sus más profundas crisis económica y política. cios de salud a la población. En este último caso se ha hecho notar por algunas personas que los fondos se usan como parte de los planes de pacificación de las fuerzas armadas.

Finalmente, la categoría de "alimentos comercializables" se refiere a alimentos cuya venta en el mercado se utiliza en una variedad de programas. Los congresistas apuntan que en opinión de algunos este rubro debería incluirse en los gastos "indirectamente relacionados con la guerra", pues aproximadamente la mitad del producto de la venta se destina a las tareas de pacificación y otro 25 por ciento a las personas desplazadas por la guerra.

En conclusión, según la fuente utilizada, en cinco años los Estados Unidos han destinado al gobierno salvadoreño un total de 1 700 millones de

dólares, cuya importancia en la "guerra prolongada", está fuera de toda discusión.

Según puede verse en el Cuadro 3, un 77% de los fondos tiene aplicación militar. Parte de esos fondos sirvieron, indudablemente, para llevar a cabo la reestructuración completa del ejército salvadoreño; una reestructuración al servicio de la "guerra prolongada", que seguirá demandando inyecciones financieras norteamericanas por un período que no puede definirse *a priori*.

Es fácil imaginar que la prolongación de la guerra agravará las consecuencias económicas de la confrontación. Tampoco pueden pasarse por alto sus consecuencias político-militares. Refiriéndose a la reestructuración del ejército y a su reequipamiento militar, una publicación especializada en la problemática de El Salvador apuntaba no hace mucho tiempo lo siguiente:

"Todo este despliegue tenía por objeto crear condiciones para un cambio sustantivo de estrategia militar, hacia una aplicación total de las tácticas de contrainsurgencia heredadas de Viet Nam..."

(...) La estrategia está diseñada para obligar a la guerrilla a movilizarse sin control fijo de territorios y, eventualmente, ir fragmentando en pequeñas bandas sin enlace táctico entre sí" (19A).

Si se relaciona lo anterior, que data de mediados de 1985, con acontecimientos de los que se ha informado en 1986, la situación tiene que verse ahora bajo una perspectiva diferente. Se sabe, por ejemplo, que la guerrilla fue desalojada del volcán Guazapa después de resistir durante varios años las ofensivas del ejército, y se ha informado también acerca de un cambio radical de la línea de organización de las FMLN (de formación de ejércitos a la dislocación territorial de unidades pequeñas). Al parecer, la dirección norteamericana comienza a dar sus frutos; el tiempo es un factor que actúa en su favor, y no al contrario. Ciertamente, un sector del FMLN desde mucho antes ha mostrado preferencia por una lucha a largo plazo con unidades guerrilleras diseminadas en el territorio salvadoreño, pero ahora el paso se ha dado, o se viene dando, porque las circunstancias lo hicieron forzoso.

Por supuesto, en una situación como la de El Salvador incurriría en un grave error quien concluyera que la reestructuración del ejército y el incremento de su capacidad operativa anuncian el principio del fin. Tan erróneo es subestimar el alcance de dichos cambios y de la participación norteamericana, como lo es también considerar que tal participación condena a la insurgencia salvadoreña a

una catástrofe inevitable. El desenlace de la guerra civil depende de muchos factores, y entre ellos, como algo fundamental, depende de la disposición en que esté la población respecto de la guerra.

Finalmente, es posible conjeturar que la evolución a que se ha hecho referencia tendrá consecuencias políticas importantes. Es de suponer que las Fuerzas Armadas adquirirán más confianza en sí mismas, y si además su percepción fuera que "el empate" de los años recientes comienza a romperse a su favor, seguramente se sentirían menos inclinadas a negociar, al menos en los términos que tenían que hacerlo cuando el equilibrio era ostensible.

Veamos ahora lo que se refiere a Nicaragua.

V

Las primeras organizaciones de la contrarrevolución se formaron en 1980: una fue de exguardias somocistas; la otra la integraron exoficiales somocistas; y la otra estaba compuesta por miembros de la cúpula de la exGuardia Nacional somocista. En 1981 se constituyeron otras organizaciones, entre ellas el Frente Democrático Nacionalista (FDN). En 1982 se formó la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE); el FDN creó un Directorio Político y se organizó en unidades militares (*task forces* o fuerzas de tarea). La Central Intelligence Agency pasó ese año a tener una intervención directa en las actividades de los "contras". En 1984 la CIA presionó, sin éxito, para que todos los grupos se unificaran; y, por su parte, el FDN organizó No solo coexisten: se interaccionan. Lo que las agrava aun más es la guerra. Lo que las prolonga es la intervención extranjera. La paz contribuiría a solucionarlas; la negociación podría conjugar los intereses en juego y establecer un nuevo equilibrio.

La crisis económica "...ha significado para ellos (los países centroamericanos) una merma de la producción de tal magnitud que la mayoría de los indicadores señala un retroceso en sus condiciones medias de vida de, aproximadamente, 12 años" (22). Con todo y que lo anterior es una clara indicación de la gravedad de la situación, la realidad se proyecta a los años venideros con rasgos todavía más alarmantes, pues hay que agregar a lo apuntado las consecuencias de la prolongación de las guerras y del agravamiento de las tensiones en el área centroamericana, cuya magnitud es imposible calcular por anticipado.

Según el Ministro de Planificación de El Salvador, Fidel Chávez Mena, entre 1980 y julio de 1985 la guerrilla ha ocasionado a la economía, como consecuencia directa de acciones de sabotaje, un total de 198 millones de dólares (23). Otra fuente indica que el FMLN ha realizado 3270 acciones de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional, lo que ha ocasionado una pérdida estimada de 50 millones de dólares (24). A lo anterior habría que agregar las repercusiones de esas acciones en otros sectores de la economía, a consecuencia de los paros de labores o el desestímulo a la inversión. Y cabría agregar los profundos daños que ocasionan las campañas militares contrainsurgentes, en que se emplean a fondo los bombardeos intensivos y otros medios de destrucción, y además se da origen a grandes desplazamientos poblacionales.

Los programas de recuperación requieren disponer de ingentes recursos que deben obtenerse en el exterior, pues las economías internas no los podrían generar en el plazo necesario, mucho menos en las actuales condiciones. Esos recursos, sin embargo, no están al alcance de la mano. Todo indica que, a lo sumo, Centroamérica podría esperar recibir en el período 1984/90 entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. En ese mismo período se debería pagar 11.500 millones de dólares en concepto de servicio de la deuda externa, lo que significa, a juicio de la CEPAL, que "...en el mejor de los casos recibiría (Centroamérica) poco más de 400 millones de dólares como financiamiento neto de apoyo en siete años, cantidad 25 veces inferior a la recibida en el período 1970/82" (25).

La posibilidad de captar esos recursos se pone en entredicho al considerar la condicionalidad política de la asistencia norteamericana, que sería la principal fuente de recursos, la cual se traduce en un bloqueo total cuando se trata de Nicaragua. Para el caso es ilustrativa la experiencia del Mercado Común Centroamericano —el "medio natural" de intercambio de la industria establecida—, cuyo Fondo Centroamericano del Mercado Común no ha podido ponerse en marcha al no poder obtener, en calidad de préstamo, unos 250 millones de dólares, aproximadamente. Las Comunidades Europeas han desestimado las solicitudes que se les han hecho y los Estados Unidos se han negado a facilitar su contribución por el hecho de que la reactivación del Mercado Común involucraría a Nicaragua.

Esa misma condicionalidad política determina la orientación que tienen los flujos de recursos norteamericanos en años recientes: el fin primordial es

ganar las guerras en que están involucrados los Estados Unidos, y aun los fondos que en otras condiciones podrían tener una finalidad puramente económica tienen hoy día un sesgo militar, como se vio con detalle en la experiencia de El Salvador analizada por congresistas de los Estados Unidos.

La magnitud misma de los recursos canalizados está determinada por objetivos político-militares; en consecuencia, un cambio significativo en la región podría reducir los programas de asistencia a la modesta dimensión que tradicionalmente han tenido. A este respecto es concluyente la información que aparece en el Cuadro 5 que se inserta a continuación:

CUADRO 5

CUARENTA AÑOS DE ASISTENCIA NORTEAMERICANA A CENTROAMERICA,
1946/1985
(EN \$US MILLONES. PRECIOS CONSTANTES
DE 1986)

	1946/85	1986	1986/(1946/85)
Guatemala	1 531	96	6.3 %
El Salvador	2 584	507	19.6
Honduras	1 706	249	14.6
Costa Rica	1 528	203	13.3

FUENTE: Cifras de asistencia de los Estados Unidos, CINAS, *Estados Unidos-Centroamérica, Boletín de Análisis e Información*, No. 6, 1985. Los porcentajes son cálculo propio.

Se puede apreciar en el Cuadro 5 que los fondos solicitados por el Ejecutivo de los Estados Unidos al Congreso de este país, solamente para 1986, representan el 14% de la asistencia norteamericana a cuatro países centroamericanos en cuarenta años, lo que indica que la transferencia de recursos tiene su origen en la coyuntura actual. Es fácil suponer que la suspensión de ese flujo o su reducción a las magnitudes tradicionales, constituiría un verdadero desastre para economías que hoy día se debaten en inacabables desequilibrios del balance de pagos a pesar de la corriente de recursos financieros que perciben. En particular, esto es cierto para El Salvador y Costa Rica. Incluyendo la reprogramación de la deuda externa costarricense y con referencia solamente al trienio 1982/84, un estudio reciente concluía que: "Por su magnitud, el financiamiento externo que viene recibiendo Costa Rica es más

CUADRO 6

FLUJO DE RECURSOS NORTEAMERICANOS A CENTROAMERICA EN PROGRAMAS
DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD Y ECONOMICA, 1981/86
(EN \$US MILLONES)

	1981	1982	1983	1984	1985 a/	1986 b/	Total
Asistencia de Seguridad c/							
Guatemala	—	—	10.0	—	12.8	38.3	61.1
El Salvador	80.4	197.0	221.3	316.8	423.2	364.6	1 603.3
Honduras	8.9	68.1	104.3	117.4	219.9	179.2	697.8
Costa Rica		22.1	161.6	139.1	173.2	155.7	651.7
Subtotal	89.3	287.2	497.2	573.3	829.1	737.8	3 013.9
Asistencia Económica d/							
Guatemala	19.0	15.5	19.7	18.3	84.0	55.6	212.1
El Salvador	69.1	67.2	105.5	95.7	135.4	142.0	614.9
Honduras	36.4	43.9	50.0	54.9	72.0	69.0	326.2
Costa Rica	15.8	31.7	57.1	39.9	51.2	47.2	242.9
Subtotal	140.3	158.3	232.3	208.8	342.6	313.8	1 396.1
Flujo total de recursos	229.6	445.6	729.5	782.1	1 171.7	1 051.6	4 410.0

a/ Estimado. b/ Solicitado por el Ejecutivo al Congreso de los Estados Unidos. c/ Suma de los rubros "ayuda militar" y "fondos de apoyo económico", pues ambos rubros aparecen en el presupuesto del Ejecutivo de los Estados Unidos bajo la denominación genérica de "asistencia de seguridad". En 1986 incluye el cuadro los fondos del proyecto de ley antiterrorista: \$47 millones para los cuatro países. d/ Suma de los rubros "Ayuda al desarrollo", "otra ayuda económica" y "ayuda alimentaria". En el informe de los senadores Leach, Miller y Hartfield se argumenta que algunos de estos rubros tienen uso militar indirecto.

FUENTE: datos reagrupados con base en: *Estados Unidos-Centroamérica. Boletín de análisis e Información*, Centro de Investigación y Acción Social (CINAS), México, No. 6, 1986.

que suficiente para cubrir el déficit en cuenta corriente, pero, paradójicamente, es ese mismo financiamiento el que impide reducir el déficit dadas las condiciones en que se recibe" (26).

En lo que toca a El Salvador, según datos del balance de pagos publicados por el Banco Central de Reserva, el 78.4% del saldo en cuenta corriente en 1981/84 fue cubierto con financiamiento de la AID.

No es concebible como ya dijimos, que ese flujo de recursos se mantenga al restablecerse las condiciones de normal desenvolvimiento político. Pero, además, no puede pasarse por alto que la aplicación de los fondos inyecta una vitalidad artificial a la economía o al balance de pagos, o a ambos a la vez, que es lo más seguro. Esa vitalidad artificial deriva del hecho de que la proporción mayor de los recursos aportados se canaliza a través de programas de asistencia de seguridad. Otra parte, aunque no aparece así en el presupuesto de los Estados Unidos, se emplea indirectamente con fines de seguridad. Para el caso resultan ilustrativas las cifras reunidas en el Cuadro 6.

No obstante que en el período 1981/86 el monto de la asistencia de seguridad para Guatemala fue, comparativamente, insignificante, los recursos suministrados con ese fin a Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica representaron el 68% de la asistencia total. Llama la atención el monto de los fondos canalizados hacia Costa Rica en programas de asistencia de seguridad, pues ello significa que se quiere violentar su tradición pacífica e imponerle una militarización que solo desastres podría depararle en el futuro.

La Comisión Bipartidista de los Estados Unidos, que presidió el Sr. Kissinger, estimó que los requerimientos financieros externos de Centroamérica para poder restablecer en 1990 los niveles de actividad económica de 1980, podían cifrarse en unos 24.000 millones de dólares, si se incluye a Panamá y Belice. La Comisión estimó que la mitad de esos recursos debían aportarla los organismos multilaterales de financiamiento y la otra mitad debían suministrarla los Estados Unidos. Todo indica que las sugerencias de la Comisión no producirán más resultados que los incrementos de recursos que ya

tuvieron lugar con base en el Informe, pero hay pocos indicios, si es que hay algunos, de que la recuperación económica de Centroamérica pueda esperar algo más de las recomendaciones del Sr. Kissinger.

En conclusión, no hay realmente otra alternativa de recuperación que el restablecimiento de la paz en Centroamérica. Nos referimos a una recuperación auténtica, sustancial, duradera, y no a los resultados precarios que se han registrado en algunos casos. La paz es el marco global en que pueden insertarse todas las soluciones posibles, pues la guerra es el ambiente general en que se generan o se agravan las distorsiones y los desequilibrios. La imposición de soluciones militares no es una alternativa de las soluciones políticas. Son éstas las únicas que pueden tener debidamente en cuenta, tanto los intereses de los Estados Unidos como potencia mundial, como la circunstancia —revelada con gruesos caracteres por los hechos mismos— de que Centroamérica vive hoy día “un fin de época”, cuyo reconocimiento por parte de los Estados Unidos no lesionaría sus intereses sino, por el contrario, los centraría en un nuevo contexto.

Por de pronto no parece que esa comprensión se abra paso. La aprobación de nuevas ayudas cuantiosas a los “contras” y la mayor ingerencia de organismos de los Estados Unidos en el acoso militar a Nicaragua, acontecimientos que tuvieron lugar después de haberse escrito el presente ensayo, apuntan en dirección contraria. Pero aun así creemos que no hay lugar para un pesimismo absoluto y definitivo. La historia tiene, a veces, sesgos imprevistos. No está excluido que uno de estos favorezca a Centroamérica.

NOTAS

1. Edelberto Torres-Rivas, “El Estado contra la sociedad: raíces de la revglución nicaragüense”, en: *Crisis del poder en Centroamérica*, Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana, 1981, p. 137.

1-A. Citado por Elsa Castañeda, *Crisis social y sus manifestaciones en el agro guatemalteco, 1975-1985*, Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986 (Inédita).

2. Josef Golblat y Víctor Millán, “The Honduras-Nicaragua conflict and prospects for arms control in Central America”, en: *SIPRI Yearbook 1984. World Armaments and Disarmament*, London, Taylos and Francis, 1984, p. 521.

3. *Idem.*

4. *Idem.*

5. *Ibid.*, p. 522.

6. Gabriel Aguilera, *La dimensión militar en la crisis de Centroamérica*. Ponencia presentada en la Conferencia sobre “La crisis centroamericana y sus implicaciones internacionales”, organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (Londres) y el Colegio de México, Toluca, México, 20-22 de mayo 1985.

7. *Ibid.*, p. 10

8. *SIPRI Yearbook...*, p. 526.

9. *Idem.*

10. *Ibid.*, p. 531.

11. *Ibid.*, p. 530.

12. Mensaje de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, citado por Cepal, *Estudio Económico y Social de América Latina y el Caribe. Nicaragua. 1984*. p. 30.

13. *Report of the National Bipartisan Commission on Central America*, January 1984, Washington D.C., p. 109.

14. Lilia Bermúdez y Raúl Benítez Manaut, “La segunda administración Reagan en América Central”, *Polémica*, No. 16, Costa Rica, 1985, p. 49.

15. Lilia Bermúdez, *El “nuevo” modelo de intervención norteamericana en Centroamérica: la “guerra de baja intensidad”*, ponencia presentada en las Primeras Jornadas Universitarias por la paz en Centroamérica, organizadas por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 9-13 de septiembre 1985, p. 2.

16. Mayor General Donald Morelly y Mayor Michael Ferguson (retirados), “Low intensity conflict’ an operational perspective”, en *Military Review*, Vol. LXIV, No. 11, 1984, citado por L. Bermúdez, *op. cit.* pp. 5 y 6.

17. Jim Leach, George Miller y Mark O. Hartfield, *U.S. Aid to El Salvador: An Evaluation of the Past, A proposal for the future. A report to the arms control and Foering policy caucus*, U.S. Congress, Washington D.C., february 1985.

18. *Ibid.*, p. 18.

19. *Ibid.*, p. 19.

19-A. *Estados Unidos-Centroamérica. Boletín de análisis e información*, Centro de Investigación y Acción Social No. 4, México 1985. p. 5.

20. “La contrarrevolución nicaragüense”, *Diálogo Social*, No. 184, p. 25.

21. *Ibid.*, p. 30.

22. CEPAL *Centroamérica: el financiamiento externo en la evolución económica, 1950-1983*, p. 107.

23. Citado en: *El Salvador. Boletín de Análisis e Información*, Centro de Investigación y Acción Social, No. 19, 1985, p. 14.

24. *El Diario de Hoy*, 6-x-85, citado en: *El Salvador ...*, p. 9.

25. CEPAL, *op. cit.*, 108.

26. Alfredo Guerra-Borges, *Costa Rica: efectos del ajuste sobre el sector industrial*, CEPAL-México, documentación de distribución interna, 1986, p. 42.